

La responsabilidad de las “terceras fuerzas”

Que haya en El Salvador una polarización violentísima es un hecho evidente. Tan evidente que puede hablarse de una guerra civil con cerca de treinta mil muertos y más de trescientos mil refugiados y/o desplazados, de los cuales al menos la mitad han tenido que abandonar no sólo su lugar de vida y trabajo, sino su misma patria. Todo esto en año y medio; todo esto con ritmo creciente; todo esto sin que se atisbe una rápida solución. Pronto podremos decir que una décima parte de la población ha tenido que huir del país y que uno de cada cien salvadoreños ha pagado con su vida las consecuencias de este enfrentamiento y polarización.

Las cabezas más visibles de esta polarización son la Fuerza Armada y la Democracia Cristiana de un lado y, del otro, el Frente Democrático Revolucionario y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esos son los dos polos efectivos del enfrentamiento. Pero cada uno de ellos representa fuerzas poderosas; de lo contrario, no se explicarían la dureza y la duración del enfrentamiento. La FA-PDC cuenta, sobre todo, con las fuerzas institucionales, los recursos del Estado y el apoyo material, político, diplomático y militar de los Estados Unidos; el FDR-FMLN tiene, sobre todo, fuerzas populares y el apoyo de una vigorosa red de solidaridad internacional, que incluye a países del bloque socialista, pero también a países y organizaciones de reconocida trayectoria democrática tanto de Europa como del continente americano.

Aunque ambas partes creyesen que pueden llegar a triunfar, cada vez aparece más claro que ese triunfo no puede venir pronto y, sobre todo, que ese triunfo no puede resultar aceptable a no ser que entren en juego nuevos elementos. Algunos piensan que esa novedad tendría que surgir de sectores todavía no involucrados en el conflicto y que sólo el establecimiento e institucionalización de una nueva fuerza entre los contendientes haría posible una salida estable y pronta a la tragedia nacional. Argumentan los partidarios de esta solución que hay muchos sectores, representativos de la mayoría nacional, que se acuerparían gustosos en un centro político que salvaguardara sus intereses y promoviera un desarrollo económico, social y político con paso firme y progresivo.

1. Las organizaciones “centristas”.

Basados en esta apreciación han brotado recientemente algunos movimientos que pretenden atraer a los sectores medios, gremiales, sindicales y profesionales, y que propician la tesis centrista. Tres de estos movimientos son la Unidad Popular Democrática (UPD), la Alianza Productiva (AP) y la Acción Democrática (AD).

La UPD es una organización formada por un partido político (el PUCA) y trece organizaciones gremiales y sindicales, algunas de ellas muy importantes, a las que se acaba de sumar la Unión Comunal Salvadoreña (UCS), que es el principal movimiento campesino que participa en el proyecto gubernamental de reforma agraria. La UPD se ha manifestado en diversas oportunidades en favor de profundas reformas estructurales, así como por la pronta democratización y retorno a un Estado de derecho, lo que incluye el levantamiento de la ley marcial y el Estado de sitio, la libertad de los reos políticos, el respeto a la libertad de pensamiento y de comunicación colectiva y, en general, el cese de la violencia, de los abusos de poder y la violación sistemática de los derechos humanos. En todo su proceder, la UPD ha intentado mantener su independencia respecto a los polos de la confrontación político-militar.

También la AP surgió con el objetivo de aglutinar a los sectores medios y de propiciar una solución aparentemente centrista. Sin embargo, AP se mostró desde el comienzo vinculada a intereses pro-oligárquicos, desplazados de la esfera del poder político por la acción reformista de la FA-PDC. AP propugna el mantenimiento de una pura economía social de mercado, la revisión de las reformas decretadas, el restablecimiento del Estado de derecho y la reorganización del gobierno, que incluya una amplia representación de la empresa privada. Aunque AP reclama la aniquilación del movimiento insurgente y el desplazamiento del PDC, exonera de toda culpa a la FA, con quien se muestra

deseosa de colaborar.

AD es el grupo centrista de más reciente formación, y se dio a conocer primero como Movilización Democrática Salvadoreña. AD está compuesta por sectores profesionales de centro-derecha, interesados en una solución política racional, progresista pero no revolucionaria. Como su primer nombre lo indica, AD pretende movilizar y cohesionar un amplio centro político nacional, representado por la mayoría silenciosa, espectadora y víctima de una lucha fratricida. "Es por ello que hemos exhortado a la ciudadanía nacional a incorporarse a ese gran centro político, a incrementar su espíritu de lucha, a organizarse y a coordinar todas sus acciones, con el objeto de lograr la formación de un sólido y mayoritario bloque de acción política, como única fuerza capaz de disputar a los extremismos el dominio del país y de sacarlo adelante de la postración en que se encuentra" (MDS, abril de 1981). Los pronunciamientos de AD rezuman un cierto anti-norteamericanismo cuando ataca los esquemas reformistas de la FA-PDC y enfatiza que la culpa del desastre político y económico corresponde al sector civil de la Junta Revolucionaria de Gobierno.

Aun cuando estos tres movimientos persigan el mismo objetivo de movilizar a los sectores medios salvadoreños hacia una pronta solución del actual conflicto, tanto por el carácter de sus miembros como de sus proposiciones representan organizaciones de muy distinta naturaleza. En este sentido, resultaría engañoso incluirlos bajo el mismo rótulo de "solución centrista". Más aún, si lo que persiguen estos movimientos es ofrecer una alternativa a la opción representada por los actuales polos contendientes y constituirse en un nuevo polo político, capaz de canalizar una verdadera solución a los problemas del país salvaguardando los justos intereses de los sectores medios, creemos que han escogido una dirección equivocada. Sin embargo, hay



una importante verdad en la intuición de que la solución al presente conflicto requiere el aporte insustituible de los sectores medios y que este aporte exige el aglutinamiento, organización y ampliación de los grupos democráticos no directamente involucrados en el conflicto.

2. Error y verdad del “centrismo”.

Vayamos por partes. Ante todo, se afirma que estos movimientos no constituyen de por sí una alternativa a los grupos actualmente enfrentados. El caso más claro es el de AP: lo que está proponiendo es una simple sustitución del PDC y de sus programas por elementos y programas de la empresa privada, tan conservadores como puedan serlo los de la administración Reagan. Para nada se enfrenta con la dirección actual de la FA, sino que echa toda la culpa de la polarización y del desastre económico al PDC que, carente de apoyo popular y de capacidad técnica, no sólo no estaría resolviendo los problemas básicos, sino que estaría dificultando el que la FA termine con la subversión. AP comete un grave error de diagnóstico y, consiguientemente, su solución no puede ser correcta. Sus fallos fundamentales son los siguientes: a) considera que la fuerza del FDR-FMLN surge de la mala conducción política del PDC y no de causas sociales objetivas, de las cuales son en gran parte causantes y responsables los hombres, las ideologías y los intereses de la oligarquía salvadoreña; b) mantiene que es posible una superación de la polarización sin tener en cuenta al FDR-FMLN, con sólo reacondicionar la actual alianza en el poder, sustituyendo a los hombres del PDC por hombres de la empresa privada, como si los males del país vinieran de ayer o de la incompetencia técnica en la actual dirección de la política económica; c) ignora que los planteamientos de la actual dirigencia de la FA, de los Estados Unidos y de fuertes intereses económicos criollos tienen mucho que ver y de hecho son una de las causas principales de la actual polarización; d) asume que la única forma de salvaguardar los intereses justos del capital progresista y de la empresa privada en El Salvador es volver a un sistema capitalista renovado, sin considerar que este sistema ya ha demostrado durante decenios su incapacidad para resolver los problemas nacionales; e) finalmente, AP parece creer que una nueva alianza entre la empresa privada y la FA podría terminar en corto tiempo la guerra civil que aflige al país, como si la FA no estuviera haciendo ya todo lo posible por lograr cuanto antes ese objetivo.

Los anteriores planteamientos sólo en parte se aplicarían al grupo de AD y en poco o en nada a la UPD. Pero incluso estos planteamientos tienen un punto de verdad o, si se prefiere, estos planteamientos equivocados se apoyan en algo que es profundamente verdadero. Lo verdadero está en que: a) hay necesidad de

arbitrar nuevos elementos de solución para acelerar la llegada de una pacificación que es urgente; b) hay amplios sectores de la sociedad que no están interviniendo activamente en buscar y realizar la solución que necesita el país; c) hay profundos y sentidos intereses económicos que, si no se tienen en cuenta, lucharán por su subsistencia y se refugiarán en la solución que crean que más les favorece; d) el FDR-FMLN no ha sido capaz hasta ahora de lograr credibilidad y confianza suficientes entre diversos sectores sociales que van desde el capital progresista hasta organizaciones sindicales, desde los profesionales hasta los sectores medios, desde los hombres de Iglesia hasta los militares democráticos; e) la continuación de la lucha y el mantenimiento en el poder de las actuales fuerzas dominantes son prueba de que las condiciones objetivas no son favorables a un tipo de solución estrictamente revolucionaria.

3. Responsabilidad de los sectores democráticos.

Todo ello puede reducirse a una sola cosa: es necesario que los sectores democráticos asuman activamente su responsabilidad histórica y así hagan posible una pronta solución al conflicto, cuyos costos sociales son ya de tal magnitud que la tarea futura de la reconstrucción, independientemente de quién gane, puede estar acercándose al límite de lo realista.

Para el FDR-FMLN, esto significa que debe ampliar urgentemente su base democrática: en primer lugar, su programa ha de tener una presentación y, sobre todo, unos contenidos efectivamente democráticos, que respondan a la realidad de las fuerzas sociales y a las condiciones objetivas de la actual realidad salvadoreña en sí misma y en relación con el contexto internacional; y, en segundo lugar, es necesario que el FDR-FMLN tenga más en cuenta a los sectores no estrictamente revolucionarios, no sólo a la hora de darles explicaciones y de responder a sus justos intereses, sino también a la hora de aceptar sus aportes peculiares. Las fuerzas del FDR-FMLN deben entender que, independientemente del eventual diálogo con la alianza FA-PDC, deben emprender cuanto antes un diálogo sincero y constructivo con los sectores democráticos no incluidos ya en el FDR.

Los sectores de centro-derecha deberían entender que su interlocutor válido no es el PDC ni la FA, sino el FDR-FMLN, lo cual no excluye el que se tenga muy en cuenta tanto al PDC como a la FA; por su lado, el FDR-FMLN debería entender también que su interlocutor válido son aquellas fuerzas sociales que configuran la estructura del país y no las fuerzas políticas ubicadas circunstancialmente en la superestructura. Ambos deberían trabajar con la hipótesis de que la contradicción más significativa, en este momento en El Salvador, no es la de propietarios de los medios de producción contra la clase proletaria, sino la de



quienes tienen trabajo y poder contra quienes no tienen ni trabajo ni poder, de los que tienen seguridad y de los que no tienen seguridad, de los que tienen posibilidades y de los que no tienen sino la posibilidad de luchar hasta morir, pero preferirían tener otras posibilidades menos heroicas. Aunque esto no fuera sino la cara coyuntural de la contradicción fundamental, habría que percatarse de que urge un planteamiento coyuntural que, sin entrar en pugna con una visión estructural de más largo alcance, genere políticas inmediatas que aceleren el proceso. Un planteamiento coyuntural de este tipo no debe hacerse primariamente desde la perspectiva de costos y beneficios, pero sí desde la perspectiva de buscar medios proporcionados a los resultados posibles y necesarios.

Se parte del supuesto de que las causas que dieron origen al FDR-FMLN son más justas que las de sus adversarios, así como también lo son las causas defendidas por ellos. Se parte también del supuesto de que su proyecto es más corregible que el actualmente en marcha. Y uno de los puntos corregibles es el de una mayor acomodación a la coyuntura de El Salvador y a la correlación de fuerzas. Lo cual requiere la ampliación del sector democrático en el sentido que se acaba de apuntar. Por ello, es necesario que haya un acercamiento, un diálogo, una negociación; es menester que los sectores democráticos que buscan un horizonte y que comprenden que esto no es posible a menos que el país entero salga adelante, dialoguen con el FDR-FMLN como un todo o con aquellos grupos de esa unidad que les sean más próximos y asequibles. Los sectores democráticos tienen que pensar seriamente dónde está su mayor ventaja a corto plazo y a mediano plazo, sobre todo a mediano plazo. Y ¿cómo lo van a saber si no dialogan con quien nunca han dialogado y de quien, con toda probabilidad, tienen una imagen distorsionada por temores atávicos y por propagandas deformantes?

Estos sectores democráticos ya se han dado cuenta de que el prolongamiento de la actual situación es del todo punto intolerable. Está en juego su propia seguridad, su futuro; está en juego la viabilidad económica de sus propias empresas, están en juego la posibilidad misma de encontrar trabajo y empleo seguros. Lo que no acaban de ver es dónde y con quién pueden asegurar el futuro de su trabajo. Veámoslo en algunos casos.

4. Necesidad de conocer y dialogar.

Está, por ejemplo, el caso de la Unión Comunal Salvadoreña (UCS), recientemente incorporada a la UPD. Su exigencia fundamental es la reforma agraria. Representa a miles de campesinos más o menos organizados. El sector revolucionario repudió a esta organización ya que entendía que estaba infiltrada por el sindicalismo norteamericano, cuando no por la CIA, que sus propósitos eran meramente economicistas y no políticos, y que, en suma, constituía un adversario actual o potencial de las organizaciones revolucionarias de campesinos. Ante ese repudio, la UCS se alineó con la Junta y resultó beneficiada por los primeros pasos de la reforma agraria. Pero ahora se encuentra con que los beneficios posibles de la reforma agraria no están garantizados por una Junta vacilante y, menos aún, por una AP o una AD, deseosas de frenar los siguientes pasos de la reforma agraria y aun de volver atrás en lo ya hecho. De ahí que la UCS se haya unido a la UPD, a la búsqueda de aliados confiables a mediano y largo plazo. Sin duda, la UCS puede y debe entrar en diálogo con el FDR-FMLN para plantear sus exigencias y establecer una serie de garantías para su presente y para su futuro.

Algo semejante debe decirse de algunos sindicatos obreros, también hoy incorporados a la UPD. La Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) y la Central de Campesinos Salvadoreños (CCS), por ejemplo, fueron repudiadas por los sindicatos revolucionarios y combatidas como si fueran enemigos de clase. Sin embargo, en menos de un año han tenido setenta y un compañeros asesinados. ¿Qué pueden esperar grupos como estos de una situación como la actual o de una situación en la que recupere la hegemonía el mismo poder económico que ha estado dirigiendo el proceso salvadoreño? ¿No pueden ver respetados sus verdaderos intereses mucho mejor en alianza con los obreros y campesinos ya organizados? ¿Por qué entonces, no iniciar un diálogo con el FDR-FMLN? ¿Por qué no entran unos y otros en una verdadera negociación? Y lo que aquí se afirma de la UCS, de la CTS y de la CCS, puede afirmarse en conjunto de toda la UPD, mayoritariamente compuesta por obreros y campesinos.

Lo mismo vale de grupos organizados de la llamada clase media, que hoy están al servicio de un proyecto no sólo sin futuro, pero ni siquiera con presente. Organizaciones de profesiona-

les que sólo recuperarán su seguridad y eficiencia cuando se instale en el país un nuevo orden, que responda a los intereses reales de las mayorías. Uno de estos grupos es sin duda la AD, que surge con tanto calor nacionalista. Hay también sectores amplios entre los militares que ya manifestaron sus propósitos el 15 de octubre y a quienes se ha introducido en un proceso de violencia como no ha habido otro, tan prolongado y tan costoso, en toda la historia de El Salvador. ¿Por qué todos estos sectores no dialogan, por qué no negocian de cara al futuro, después de considerar dónde está de verdad la justicia, dónde está la viabilidad del proyecto histórico?

La pequeña y mediana empresa así como el capital progresista deben plantearse también la misma cuestión. Para ellos, como para los demás grupos, la situación actual es sumamente adversa. Ir para atrás no tiene ya sentido, porque fue aquel atrás lo que ha traído este presente; seguir con los mismos esquemas de las antiguas organizaciones empresariales lleva o al suicidio gremial o al genocidio nacional. ¿Por qué no ponen sus relojes con la hora del proceso y hacen una prospección seria de lo que les espera con uno y con otro de los polos hoy enfrentados? ¿Qué les impide conocer de cerca la realidad, dialogar, negociar? ¿Por qué no ver que también se puede progresar sin recurrir a la explotación exagerada, o a las ganancias fáciles y prontas? Es posible que incluso algunos de los grupos que hoy componen la AP pudieran entrar en este proceso siempre que no se cerraran en dogmatismos trasnochados o en intereses a muy corto plazo.



Hay así en el país toda una serie de grupos heterogéneos, cuya importancia social y política es mucho mayor de la que puede ser expresada a través de unas elecciones con votos de cada uno de sus integrantes. Ellos pueden y deben ser una fuerza importante, no para constituirse en alternativa, lo que en verdad no son, pero sí para obligar a una pronta solución en el actual conflicto polarizado e incluso para influir en el modo de esa solución. Para ello necesitan cobrar conciencia exacta de la coyuntura actual, de las posibilidades de una salida racional, justa y durable. Necesitan cobrar conciencia de su propia fuerza como grupo y de la posibilidad de acrecentar esa fuerza en una o varias alianzas sectoriales, que puedan más tarde coordinarse. Algo así se empezó a hacer con el Foro Popular en la segunda mitad del año 1979, y eso facilitó el 15 de octubre. Por supuesto, no se trata de repetir lo mismo, sino de responder a las necesidades actuales. Y una indudable necesidad actual es la de que los sectores democráticos no involucrados directamente en el conflicto ofrezcan su aporte racional y organizado.

No deben caer, sin embargo, en la tentación de convertirse en una especie de solución intermedia ("la solución centrista"), que dejara fuera a los dos polos actualmente enfrentados. Para eso, no tienen ni tendrán fuerza suficiente. Más aún, si pretenden constituirse en alternativa por sí mismos, si pretenden ser centro de poder, serán combatidos por las dos grandes fuerzas hoy existentes y poco podrán contra ellas. Más bien deberán analizar con honestidad, optar con realismo e influir con racionalidad. Todo lo cual requiere conocer y dialogar. Hasta ahora, estos sectores más han favorecido, incluso contra su voluntad, a la Junta militar democristiana. Los resultados ahí están. ¿Por qué no intentan poner su poder de democratización del lado del proyecto popular? ¿Desean acaso que se vuelva al pasado en materia social? ¿Añoran el viejo estilo oligárquico? ¿No son capaces de diseñar y negociar las bases de una nueva economía nacional, en la que prive el bien público sobre el privado? ¿Apoyan la represión colectiva como único medio para sobrevivir en largos años de temor?

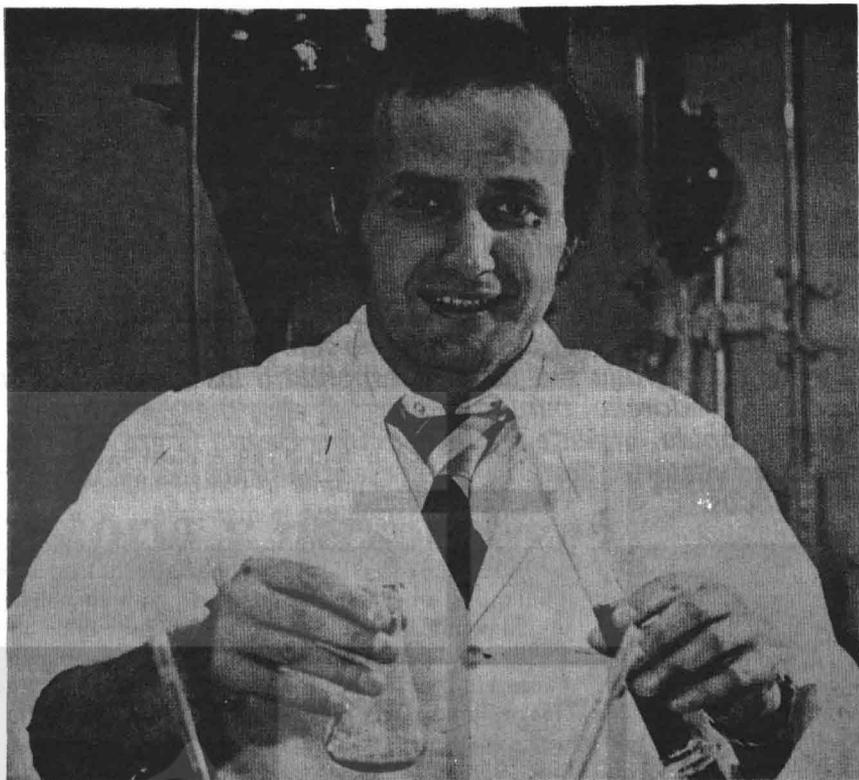
5. Dificultades y retos.

Estos sectores pueden presentar una objeción muy razonable: ¿Quién les garantiza que el proyecto popular es el mejor? ¿Quién les garantiza que en él tienen cabida sus derechos e intereses, sobre todo después de que se les ha dicho que se trata de un proyecto revolucionario, en el que los sectores democráticos tendrán sólo un poder subordinado a merced de una vanguardia hegemónica revolucionaria que hará, por ejemplo, del ejército un ejército popular, de los sindicatos un sindicato único al servi-

cio del partido único, de la economía una economía puramente estatal, del pluralismo una pura fachada?

No hay duda de que algunas presentaciones y algunas prácticas del FDR-FMLN han podido causar esta impresión. No hay duda de que algunos temores están justificados. Por todo ello, corresponde al FDR-FMLN dar el primer paso y ofrecerse a un diálogo y a una negociación. Si lo ha hecho en alguna forma con la Junta militar democristiana, aceptando propuestas y presiones de organismos internacionales y de naciones amigas, ¿por qué no lo va a hacer con estos grupos, que no tienen la misma responsabilidad en lo que está acaeciendo en el país? El FDR-FMLN está en la obligación de dar explicaciones a los distintos grupos sociales que una vez fueron repudiados o atemorizados; está en la obligación de adecuarse a la nueva coyuntura, de ser realista y de no absolutizar su proyecto ni su poder, ambos relativos en lo teórico y más relativos todavía en la práctica. Nunca se podrá ceder en lo que es necesario y esencial para sacar al país del estado en que se encuentra después de años de opresión y represión, y después de ya muchos meses de guerra civil. Pero nunca tampoco se debería dejar de hacer lo que es necesario para acortar el sufrimiento del pueblo, la muerte de tanto ciudadano, la destrucción del país. Y una de las cosas necesarias que el FDR-FMLN debe realizar con urgencia es la ampliación de su base democrática, tanto en el plan de gobierno como en las fuerzas participantes. Quien de verdad confía en el pueblo no tiene por qué tener miedo de desviaciones ni por qué autoconsiderarse como detentador único de la verdad y de la justicia.

Los sectores medios de definida orientación democrática tienen por su parte el deber de buscar aproximaciones, diálogo y alianzas. Ciertamente en la UPD, pero también en AD, se percibe una opción antioligárquica. Todos, de una u otra manera, han expresado que están en contra de la intervención extranjera, venga de donde viniere. Algunas de estas organizaciones han sido claras en denunciar la injerencia norteamericana en los asuntos internos, sin por ello transigir con otras posibles injerencias. Hablan de nuestro país con énfasis y orgullo, y cifran su confianza en las fuerzas propias de la nacionalidad salvadoreña. En tales principios hay una concordancia objetiva con lo que expresa el FDR en sus declaraciones y aun con lo que exige el FMLN. Es probable que, más allá de la ignorancia mutua y los malos entendidos, las diferencias provengan en buena medida de los distintos modos de comprender y situarse frente al proceso de cambios estructurales que el país necesita. La extremada ideologización de parte de unos y la nula, escasa o inconsciente de otros, lleva a desajustes en sectores que, si buscan de verdad la pacificación y la reconstrucción del país, deberían estar unidos contra aquellas fuerzas que han impedido y siguen impidiendo el desarrollo integral de El Salvador; unidos contra grupos que tra-



dicionalmente se han apoyado en las armas para imponer un esquema económico, social y político contrario a la soberanía popular y lesivo al bien público. La ampliación del sector democrático es un principio de solución global a la crisis que hoy aflige a toda la República. Y si el FDR y el FMLN tienen que flexibilizar sus estrategias y responder a los datos de la realidad con menos dogmatismo, también los sectores democráticos tienen que abrir sus mentes a esos mismos datos de la realidad salvadoreña y asumir la responsabilidad que les corresponde.

Porque no toda la responsabilidad debe dejarse al FDR-FMLN en esta tarea de ampliación y acercamiento. Muchas de las dificultades para ello han sido creadas por la desinformación nacional e internacional. Contra esta desinformación, los sectores democráticos deben pensar que, fuera de nuestras fronteras, representantes del FDR son acogidos como verdaderos representantes del pueblo salvadoreño ante organizaciones de centro-izquierda como es la Internacional Socialista, ante instituciones moderadas como el Parlamento Europeo, ante la propia Unión Mundial Demócrata Cristiana, ante países tan centristas como Francia, México o Panamá. No es un crimen entrar en diálogo y negociación con el FDR, cuando el propio Presidente Duarte habla de la posibilidad de que fueran a elecciones sus antiguos aliados en las urnas, el MNR y la UDN; ni lo es siquiera hacerlo con el FMLN, que es un poder real en el país con el que inevitablemente se ha de tratar, si se quiere una solución política y no puramente militar.

No sólo no es un crimen; es una necesidad. Es una obligación política. Si se fracasa en el intento o porque el diálogo ni siquiera se pudo iniciar o porque el diálogo no llevó a una negociación satisfactoria, siempre queda la posibilidad de iniciar una nueva vía. Pero el intento no puede darse por fracasado antes de emprenderlo. No es que la negociación, incluso aunque tuviera un gran éxito, sea un recurso suficiente para lograr la paz. Pero puede ser un paso muy importante no sólo para la paz, sino para que la paz lograda sea justa y responda a las necesidades del pueblo salvadoreño, para que la paz sea el primer paso firme hacia una rápida, urgente reconstrucción. De ahí la grave responsabilidad histórica ante la que se encuentran los sectores democráticos.

